

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 18° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-10284-2023
CARATULADO : CONTRERAS/FISCO - CDE

Santiago, cinco de febrero de dos mil veinticinco

VISTOS:

A folio 1, don Sebastián Velásquez Díaz, abogado, domiciliado en Doctor Sótero del Río N°326, oficina 7070, comuna de Santiago, compareciendo en nombre y representación de don Félix Marcelo Contreras Nieto, periodista, domiciliado en Los Tulipanes N°2969, comuna de Providencia, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado – en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en Agustinas N°1225, piso 4, comuna de Santiago.

Funda la demanda en base al relato en primera persona de don Félix Marcelo Contreras Nieto, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech 2, N°2163, el cual pasa a transcribirse a continuación: *“En el año 1970, luego del triunfo del doctor Salvador Allende G. como Presidente de Chile, fui designado por él en el cargo de Director Regional de la Corporación de Servicios Habitacionales (CORHABIT) en Valparaíso, cargo que desempeñé hasta el 11 de septiembre de 1973 y del cual fui exonerado el 12 de septiembre del mismo año.*

En el mes de noviembre de 1973, fui detenido por primera vez en la comuna de Quilpué por el Servicio de Investigaciones de esa comuna, siendo trasladado a sus dependencias, en donde sufrí a apremios físicos y psicológicos, para luego ser puesto a disposición de la Armada de Chile que operaba en la Base Aeronaval del Belloto, la cual comenzó a operar como campo de detención en los primeros meses de la dictadura cívico militar en la V región, al mando del Contralmirante Ernesto Huber Von Apeen.

En este recinto, que estaba bajo las órdenes de efectivos de la Armada, permanecí detenido durante 8 días, junto a un grupo de aproximadamente 20 personas, en una suerte de trinchera rodeada de piedras y que se



Foja: 1

encontraba cavada en parte de su patio, tendido en el suelo, a la intemperie día y noche, privado de abrigo y sueño, y torturado por sus efectivos. De ahí era sacado a una especie de carpa, a cualquier hora para ser interrogado sobre mi militancia y vinculación con el gobierno del Presidente Allende. Además, los marinos ubicaron fuera de la trinchera un busto del Che Guevara donde teníamos que recurrir a hacer nuestras necesidades biológicas, lo que aumentaba mi sentimiento de humillación, indignidad como persona, vulneración de mis derechos y sentimiento de derrota moral a mis principios.

En esta trinchera donde en el día hacía mucho calor, ya que estábamos al aire libre, y en la noche hacía mucho frío, porque no había donde refugiarse, me generaron una sensación de angustia, incertidumbre y temor de lo que sucedería con mi persona, ya que se sacaban a algunos detenidos y estos no volvían. En ese lugar también se encontraba mi cuñado, Carlos Taibo Grossi, quien había sido detenido en su domicilio en Quilpué el día

anterior a mi detención. En este lugar éramos custodiados permanentemente por personal armado de la Armada, impidiéndose la comunicación entre los detenidos, aumentando aún más un sentimiento de incertidumbre y de pérdida de la dignidad como ser humano

Allí fui objeto de sucesivos interrogatorios por parte de los efectivos los que lo hacían en pareja, por las voces que escuchaba, y fui sometido apremios físicos (golpes) y psicológicos, vulnerándoseme todos mis derechos, para ser liberado posteriormente sin cargos, con la obligación de firmar semanalmente en Carabineros de Chile en la comuna de Quilpué. Durante todo el tiempo que permanecí en ese lugar se sumaba mi temor de que mi familia, que se encontraba en el exterior, también fuera objeto de detención y temor de no volver luego de que me sacaran para tomarme declaración, y cual sería mi destino, ya que veía como algunos detenidos no volvían más.

Esta obligación de control de firma se mantuvo por el lapso de 13 meses, todos los sábados, con la consiguiente preocupación de volver a ser detenido en cualquier momento en que concurría a sus dependencias.

Durante todo ese tiempo de detención mi familia no logró obtener información del lugar donde me encontraba detenido ni el motivo de esta ya que no existía organismo alguno que otorgara atención a los familiares y a las víctimas, lo cual generó en mi familia un sentimiento de vulnerabilidad al creer que quizás nunca más me verían, que podría desaparecer, o que incluso podrían detener a otros miembros de la misma. Esto se basaba en que se sabía que otro detenido conducido al mismo recinto, Jaime Aldoney, había sido detenido el 12 de septiembre y posteriormente no se supo más de su paradero, engrosando la lista de detenidos desaparecidos.



Foja: 1

Mi segunda detención se produjo en mi departamento, ubicado en el edificio de la calle Esmeralda de la ciudad de Valparaíso, en el mes de Febrero de 1974, por parte de efectivos de la Armada que portaban metralletas y que se movilizaban en una patrulla, en presencia de mi esposa, Ximena Taibo Grossi, y mi hija menor, de tan sólo 8 meses de edad. Esta detención se produjo a las 16:00 horas, y en presencia además de innumerables residentes y transeúntes, ya que salí del edificio con las manos en la nuca y apuntado con armas de fuego por los integrantes de la patrulla de la Armada.

Fui conducido al Cuartel Silva Palma ubicado en la cima del cerro Artillería de la ciudad de Valparaíso con una capucha en la cabeza que me impedía la visión y lanzado en la parte de atrás, en el piso de una camioneta, sin más explicaciones ni diálogo con mis aprehensores. Solo me dijeron al momento de la detención que no me resistiera y que los acompañara. En este recinto fui llevado a una sala amplia y colectiva, con camarotes, en donde se encontraban numerosos detenidos, alrededor de 25, en donde me encontré con Pablo Cristoffanini, a quien conocía porque ambos militábamos en el Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu) de Valparaíso.

En esas dependencias permanecí dos semanas, en donde era sacado a otra sala para interrogatorio, y donde fui sometido a numerosos interrogatorios, y fuertes y reiterados apremios físicos y psicológicos, recibiendo permanentemente golpes con tubos de goma, golpes de puños y patadas en todas las partes del cuerpo, además de aplicación de corriente. Los interrogatorios eran reiterados. Me sacaban de la pieza a cualquiera hora del día o de la noche, para lo cual me trasladaban a otra sala de interrogatorio, ubicada en la parte superior, porque debía subir una escalera. En ese lugar, encapuchado siempre, me aplicaban las torturas descritas. En los interrogatorios participaban una pareja de agentes, por las voces que escuchaba. Estas torturas y maltrato físico me dejaron hematomas en todo el cuerpo, desde el cuello hasta las piernas, dolores abdominales y musculares, lo cual me duró por varias semanas, y me impedían hacer movimientos normales.

Los interrogatorios versaban sobre mis responsabilidades en el gobierno, mi cercanía con el gobierno de Salvador Allende, mi pasado como dirigente político (ex Secretario Regional del Mapu, coordinador de la campaña del doctor Salvador Allende en Valparaíso), mis vínculos con parlamentarios y dirigentes políticos regionales (Luis Guastavino y Andrés Sepúlveda, entre otros) y acerca de mi supuesto conocimiento de armas.

Nunca vi a quienes me interrogaban y torturaban por estar siempre encapuchado cada vez que me sacaban a interrogatorio, que, como relato, podía ser en cualquier momento y a cualquiera hora del día.



Foja: 1

Posteriormente conocieron de mi detención y el lugar de esta, y que pueden testificar al respecto, mi familia y numerosos amigos y compañeros del partido. Entre ellos los abogados Jorge Abbott Charme (exfiscal Nacional), Jaime Esponda Fernández, Jorge Molina Valdivieso, el ex senador Jaime Gazmuri (en ese entonces Secretario General del Mapu Obrero y Campesino), la Asistente Social María Luisa Sepúlveda (secretaria de la Comisión Valech 2) y más en general los militantes del Mapu en la quinta región y del nivel central.

Durante mi encarcelamiento y producto de las torturas que afectaron seriamente mi estado físico y mental durante un largo tiempo, recuerdo que un capellán de la Armada pasaba periódicamente a visitar los detenidos, entregando para tomar a los más afectados por los apremios físicos, una pastilla blanca y otra café que posteriormente descubriría que se trataba de Tanderol y Papenzima. Lo sé porque estos fueron los mismos medicamentos que me recetó el doctor Aldo Francia, que chequeó mi estado de salud en mi domicilio luego de mi liberación, ya que no podía concurrir a ningún centro asistencial, por temor a una nueva detención.

La liberación se produjo a las dos semanas de mi detención, en que me condujeron encapuchado hasta las puertas del Cuartel Silva Palma y me empujaron hacia la calle. Por mis propios medios bajé como pude caminando hasta el plan de la ciudad y un chofer de Taxi, en una acción humanitaria, me llevó por unas pocas monedas que tenía hasta mi domicilio.

No me formularon ningún tipo de cargos y mantuve la obligación de firmar semanalmente en dependencias de Carabineros de Quilpué.

Durante toda mi detención mi familia no logró saber dónde me encontraba, ya que no había donde recurrir para solicitar apoyo jurídico ni humanitario, quedando en la más absoluta desprotección, incertidumbre, angustia y vulnerándose todos mis derechos. Además, aumentado por el temor a que desapareciera, ya que se conocía de detenidos que no habían sido ubicados, y de otros que habían sido llevados en barcos de la Armada a Pisagua o a la Isla Dawson. Por otro lado, estaba la absoluta soledad y falta de apoyo y contención en que quedó mi cónyuge y familia más directa, ya que nadie de los amigos y conocidos se acercaban a ellos por el temor a que mi familia estuviera siendo vigilada por los servicios de seguridad de la Armada y afectara a terceras personas.

Luego de mi segunda detención, mi cónyuge con mis 2 hijas pequeñas se quedaron viviendo en Valparaíso, con el apoyo de su familia, y yo me tuve que trasladar por varios meses a la ciudad de Santiago a casa de unas personas que me acogieron, por el temor de seguir siendo detenido y por la inseguridad permanente a la que me sentía expuesto. Debía viajar semanalmente a la V Región para cumplir con mi obligación de firmar en



Foja: 1

la Comisaría de Quilpué, con el razonable temor de ser detenido, cada vez que concurría a cumplir con este deber.

Posteriormente en el año 1975, luego de 14 meses, mi familia se pudo venir a Santiago a un departamento en la Remodelación San Borja, donde pudimos reunirnos como familia.

Todo nuestro proyecto de vida se había destruido, ya no existía el círculo de amigos que teníamos, ya que muchos tuvieron que partir al exilio o trasladarse a otras ciudades, recursos económicos para la subsistencia ya no estaban desde el mismo 11 de septiembre de 1973, y el sentimiento de inseguridad y desprotección era permanente, y nos costó mucho tiempo reconstruirlo, con todos los efectos psicológicos que ello conlleva.

Mi esposa posteriormente en el año 1975 entró a trabajar en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile en Santiago, mientras que yo me incorporé al Estudio Jurídico del abogado Jorge Molina Valdivieso, que defendía presos políticos.

Posteriormente, en el año 1976, me incorporé a trabajar en la Vicaría de la Solidaridad como encargado de la Unidad de Estudios y Publicaciones, cargo en que me mantuve hasta 1979 para asumir la subdirección de la Revista APSI hasta 1980, fecha en que fui designado como Director responsable hasta 1995, que coincidió con su cierre por motivos económicos.

En esa calidad, y al igual que los demás directores de la llamada prensa alternativa o de oposición a la dictadura cívico-militar, fui objeto de numerosas querellas (siete) por parte de la justicia militar, bajo la acusación

de ofensas a las FF.AA., por denunciar graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, así como crímenes de lesa humanidad, que comprometían a sus integrantes y al propio régimen. Querellas que sólo se cerraron con el restablecimiento de la democracia. De igual manera, sufrimos numerosas censuras y suspensiones de la publicación en virtud de los estados de excepción decretados por el gobierno militar, así como la requisición de una edición de la revista de carácter humorístico y seguimientos como una forma de amedrentamiento.

Posteriormente, a raíz del atentado en contra de Pinochet, y luego del cual los organismos de seguridad procedieron a la detención de periodistas y políticos, el día 10 de septiembre de 1986, funcionarios de investigaciones concurrieron e ingresaron hasta mi domicilio particular a las 19:30 horas, ubicado en ese entonces en calle Las Nevadas 2992 comuna de Providencia, donde solo se encontraban mis 3 hijos y la persona que los cuidaba mientras nosotros trabajábamos, manifestando que me necesitaban para tomarme una declaración y que existía una orden de arresto del Ministerio de Interior, no exhibiendo ninguna orden. Antes de retirarse, y ya en



Foja: 1

presencia de mi cónyuge, manifestaron que si no me ubicaban el procedimiento sería otro. Yo no volví a mi casa por razones obvias.

Al día siguiente, a las 10:00 horas, funcionarios de la Policía de Investigaciones concurrieron en mi búsqueda hasta las oficinas de la Revista APSI, ubicada en Alberto Reyes 032, manifestándole al Subdirector de la Revista, Sergio Marras Vega, que existía un decreto del Ministerio de Interior el cual no exhibieron.

Ante esta situación el Subdirector de Revista Apsi Sergio Marras Vega presentó un Recurso de Amparo en mi favor el mismo día 10 de septiembre, el cual fue ingresado a la Corte de Apelaciones por un abogado de la Vicaría de la Solidaridad, solicitando se oficiara a la Policía de Investigaciones y al Ministerio del Interior para que informara si existía orden de detención en contra de mi persona.

Debido al inminente peligro de detención que me afectaba y ante el riesgo de correr un atentado más grave en mi contra, ya que anteriormente había sido detenido por agentes de la CNI y asesinado el periodista de Revista Análisis José Carrasco, decidimos con mi cónyuge que debía irme fuera de Santiago hasta que se resolviera el Recurso de Amparo.

Es así como me traslade desde Santiago a Concepción solo acompañado con mi hija mayor, que en esa época solo tenía solo 13 años, como única forma de saber si algo ocurría en el viaje y en caso de ser detenido ella pudiera avisar por los medios que pudiera para tomar otras medidas pertinentes, con la angustia que eso acarreaba ya que también se le exponía a mi hija a situaciones de riesgo y traumáticas. Hay que tener presente que en esa época no había celulares ni otras formas de comunicación más expeditas por lo que esa fue la única posibilidad a la que optamos, con la angustia e incertidumbre que eso me provocaba a mí y mi familia. Después de unas semanas

volvimos a Santiago con mi hija, cuando el Ministerio del Interior informó que no existía orden de detención vigente en mi contra.

Nuevamente y de manera intensa, la angustia, incertidumbre, sensación de desprotección y vulnerabilidad estaba presente de forma patente y nítida en mi persona y en nuestra familia.

Posteriormente, a propósito de la edición especial de humor de revista APSI titulado "Las mil caras de Pinochet", fui detenido por tercera vez el 24 de agosto del año 1987, esta vez por orden del titular de la Segunda Fiscalía Militar Lorenzo Andrade, acusado de "asesinato de imagen" e injurias al Comandante en Jefe del Ejército, encargándome reo por infracción al artículo 284 del Código de Justicia Militar.



Foja: 1

Esta acción, calificada como abusiva en los procedimientos de la Justicia Militar, fue protestada y condenada públicamente por organismos internacionales y nacionales, como la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), el departamento de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales, la Sociedad de Escritores de Chile, la Federación Internacional de Editores de periódicos (con sede en Francia), la Asociación Nacional de la Prensa, el Directorio Nacional del Colegio de Periodistas, entre otros, calificándola como un atentado a la libertad de expresión.

Debí permanecer 2 meses en calidad de reo en el anexo cárcel Capuchinos, junto al Subdirector de la Revista, el periodista Sergio Marras Vega, hasta el 22 de octubre del mismo año, en que obtuve la libertad bajo fianza. Para mi defensa conté con la defensa de abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante todo el tiempo que duró el proceso. Este proceso se cerró posteriormente luego de la recuperación de la democracia.

Algunas de las circunstancias de estas detenciones constan en una carpeta abierta por mi cónyuge en la Vicaría de la Solidaridad.”

EN cuanto al daño, refiere que del relato se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, físico y moral incommensurable, todos de carácter permanente.

Concluye en mérito de las disposiciones legales y constitucionales que transcribe, solicitando tener por presentada demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, ya individualizado y en definitiva se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de \$200.000.000, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con expresa condena en costas.

A folio 11, doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, contesta la demanda solicitando el rechazo de la demanda en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.

Opone excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado la demandante. Expresa que el Estado de Chile, en un esfuerzo por reparar el daño sufrido por víctimas de violaciones a los derechos humanos, ha efectuado una serie de esfuerzos tendientes a conceder la reparación del daño. Así la ley 19.123 y las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la



Foja: 1

reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

En cuanto a las reparaciones mediante transferencias directas de dinero, menciona que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de: a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737. En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Afirma que, desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Respecto de las reparaciones específicas indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° s 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. La ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, cabe consignar que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En lo concerniente a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234



Foja: 1

como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Finalmente, respecto de las reparaciones simbólicas, invoca una compensación satisfactiva mediante la construcción de memoriales, establecimiento de museos y obras afines.

Indica que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo *Domic Bezic, Maja y otros con Fisco* ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *“aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”*.

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que:

“DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de



Foja: 1

Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiere gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien –como se dijo- percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos”.

A continuación y en subsidio de la excepción de reparación integral, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva, esgrimiendo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes. Conforme al relato efectuado por la demandante, las detenciones ilegales y torturas que sufrió, tuvieron lugar entre noviembre de 1973 y octubre de 1987. Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de



Foja: 1

notificación de la demanda de autos, esto es, el 14 de julio de 2023, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opongo la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que controvierto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil. Asimismo, indica que no existe normativa alguna que establezca que en materia de Derechos Humanos, la acción derivada de un ilícito civil sea de carácter imprescriptible, citando al efecto jurisprudencia afín.

En subsidio de las defensas y excepciones precedente, opongo alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, toda vez que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”*.

En subsidio de lo anterior, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Finalmente alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, los que sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Concluye, solicitando tener por contestada la demanda civil, y en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.



Foja: 1

El Tribunal tuvo por contestada la demanda.

A folio 16, obra réplica del actor, quien ratifica lo expuesto en la demanda y refuta la defensa esgrimida por el Fisco de Chile.

A folio 18, rola dúplica de la parte demandada, quien reitera lo expuesto en la contestación del libelo.

Por tratarse de un Juicio de Hacienda, se prescindió del llamado a conciliación.

A folio 19 y modificada a folio 32, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la instrumental que rola en autos.

A folio 37, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1º) Que, don Sebastián Velásquez Díaz, abogado, domiciliado en Doctor Sótero del Río N°326, oficina 7070, comuna de Santiago, compareciendo en nombre y representación de don Félix Marcelo Contreras Nieto, periodista, domiciliado en Los Tulipanes N°2969, comuna de Providencia, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado – en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en Agustinas N°1225, piso 4, comuna de Santiago, conforme fundamentos de hechos y de derecho reseñados en la expositiva de esta sentencia, solicitando en definitiva se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de \$200.000.000, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con expresa condena en costas.

2º) Que, la parte demandada procede a contestar la demanda solicitando su total rechazo conforme excepciones y alegaciones ya expuestas.

3º) Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o esta, ello al tenor de lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil.

4º) Que, a fin de acreditar sus dichos la parte demandante rindió prueba instrumental que se singulariza a continuación: copia de Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28º Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia; copia de Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del



Foja: 1

año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad; copia de Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad; copia de Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad; copia de Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad; copia de Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1; copia de Nómina de Presos Políticos y Torturados Comisión Valech 1; copia de antecedentes de carpeta de don Félix Marcelo Contreras Nieto presentados ante la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura y copia de Informe Psicológico Efectos de la Prisión Política, Tortura y Exilio de don Félix Marcelo Contreras Nieto, elaborado por el Programa

5º) Que, la parte demandada no rindió probanza alguna que ponderar, sin perjuicio de ello, obra a folio 21 copia de respuesta a oficio solicitado por ésta consistente en ORD DSGT N°18848/2024 de fecha 11 de noviembre de 2024, emitido por el Instituto de Previsión Social que da cuenta de los montos por reparación Leyes N°s 19.234, 19.992 y 20.874 recibidos por el demandante

6º) Que, el demandante ha comparecido a estrados invocando su calidad de víctima de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, motivo por el cual reclama por esta vía el resarcimiento del daño que dicho episodio le ocasionó.

7º) Que, del mérito de lo expuesto en la fase de discusión de estos antecedentes y la copia de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas por la Comisión Valech acompañada por el actor, no objetada, se tiene por acreditado en autos que don Félix Marcelo Contreras Nieto es víctima de violación a los derechos humanos.

8º) Que, el Fisco de Chile opone excepción de prescripción extintiva de la acción civil indemnizatoria, fundado en que a pesar de encontrarse suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 14 de julio de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del



Foja: 1

Código Civil, o en subsidio aquel contemplado en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal.

9º) Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, cabe tener en consideración que la detención ilegal de demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de todo ser humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil.

10º) Que, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

11º) Que, dado que los derechos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

12º) Que, sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

13º) Que por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4º la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.



Foja: 1

14º) Que a la luz de lo que se ha venido diciendo no cabe sino el rechazo la excepción de prescripción

15º) Que, finalmente el demandado deduce excepción reparación integral fundado en que el demandante ya ha sido indemnizado, ello en virtud de la dictación de la Ley N°19.123 que dispuso la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la que se ha realizado a través de transferencias directas de dinero, asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y reparaciones simbólicas.

16º) Que con dicha alegación el Fisco reconoce, en el caso concreto, una necesidad de reparación y como consecuencia de ello un daño, el que esta sentenciadora entiende que corresponde al daño moral, esto es, toda afección que acarrea un agravio en las afecciones legítimas o de un derecho subjetivo inherente e inmaterial de una persona e imputable a la otra.

En el caso de autos, el perjuicio antes señalado se entiende corresponder al daño moral del actor el que hizo consistir en sufrimiento y angustia irrogada por las diversas vejaciones, torturas físicas y psicológicas cometidas en su persona por agentes del Estado a partir de su primera detención ocurrida en el mes de noviembre de 1973, siendo detenido nuevamente en el mes de febrero de 1974.

17º) Que efectivamente, tal y como lo señala el demandado al contestar la demanda, se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la de los demandantes, las que han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de cada ser humano que haya sido objeto de tales hechos, ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico, esta sentenciadora no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política de la República, por lo que se desestimaré la alegación de suficiencia de pago.

18º) Que, siendo un hecho indubitado la calidad de víctima invocada por el actor, forzoso resulta concluir que en virtud de principios internacionales en materia de marras los derechos que le fueran conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile.

19º) Que, a fin de acreditar el daño moral el actor acompaña, en lo pertinente al daño específico, copia de Informe Psicológico Evaluación de daño de don Félix Marcelo Contreras Nieto, elaborado por el Programa de



Foja: 1

Reparación y Atención Integral de Salud PRAIS, que mediante metodología basada en los criterios del Protocolo de Estambul, se aplica prueba psicológica y entrevista clínica concluyendo que la violencia ejercida por el Estado en contra de don Félix Marcelo Contreras Nieto ha tenido un profundo impacto en la vida de la persona evaluada, observándose como consecuencia de la prisión política y tortura, un Trastorno por Estrés Postraumático Complejo provocado por las experiencias de represión sufridas y que resultan acumulativas en tanto las mismas se produjeron en diferentes momentos de la dictadura.

20º) Que del mérito del instrumento privado antes detallado y no objetado en contrario esta Juez concluye que el actor naturalmente ha sufrido una aflicción en su psiquis producto de los tratos inhumanos a que fuera expuesto por agentes del Estado en múltiples ocasiones, el que debe conforme a criterios de justicia y equidad ser indemnizado, por tanto, se estima prudencialmente la indemnización del daño moral en la suma de \$40.000.000 en favor del actor.

21º) Que, en cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, atendida la naturaleza declarativa de la presente sentencia, las sumas ordenadas deberán enterarse debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, contabilizados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta que se efectúe el pago efectivo.

22º) Que, no se condenará en costas al Fisco de Chile por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

23º) Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de prescripción y reparación integral;

II.- Que se acoge la demanda de autos respecto del daño moral sufrido, daño que esta sentenciadora estima prudencialmente en la suma de \$40.000.000.- a favor de don Félix Marcelo Contreras Nieto, más los



Foja: 1

intereses y reajustes consignados en el considerando vigésimo primero de este fallo;

III. Que, no se condena en costas a la parte demandada por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

CONSÚLTESE SI NO SE APELARE.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Dictada por doña Claudia Donoso Niemeyer, Juez Titular; autoriza don Erwin Emir Cárdenas Jofré, Secretario Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, cinco de febrero de dos mil veinticinco**

